

18º FORO DE GOBERNANZA DE INTERNET DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - LACIGF

Córdoba, Argentina, 5 y 6 de noviembre de 2025

RELATORÍA

Después de esta sección, está disponible la versión en portugués de la relatoría.

Información de la sesión

Título de la sesión: Medio ambiente, tecnología y resistencias: desafíos digitales de la defensa ambiental en América Latina

Fecha y hora: 6 de noviembre de 2025 – 2:15 pm a 3:30 pm

Lugar: Sala 1. Edificio Centro Juan Carlos Scannone S.J. de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo, 323, Córdoba).

Moderación:

- Jamila Venturini - Derechos Digitales (presencial)
- Laura Mantilla-León - Derechos Digitales (virtual)

Panelistas:

- Oscar Daza Gutiérrez - OPIAC - Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana
- Maria Paula Gonzalez Espinel - Ambiente y Sociedad
- Javier Palummo - REDESCA/CIDH
- Joara Marchezini - Instituto Nupef
- Renata Negrelly - Secretaría de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil
- João Aguiar - Internet Society

Relatoría:

- Zeilane Fernandes Conceição - Instituto Nupef

Contenido de la relatoría (español)

Mensajes centrales:

La sesión, coorganizada por Derechos Digitales y el Instituto Nupef, tuvo como objetivo primordial visibilizar el rol de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la crisis socioambiental y energética, abordando las barreras que enfrentan, el potencial de las tecnologías para potenciar su labor y los desafíos para que esto se concrete.

Las intervenciones coincidieron en que las personas defensoras del medio ambiente enfrentan una combinación de desigualdades estructurales y amenazas digitales que limitan su capacidad de participación y su seguridad. La brecha digital, la falta de infraestructura de conectividad, los altos costos de acceso y las barreras lingüísticas y tecnológicas fueron señaladas como factores que profundizan la exclusión de estas personas defensoras de los espacios de toma de decisiones.

Se destacó también que la transparencia y el acceso a la información ambiental son condiciones esenciales para la rendición de cuentas y la defensa de derechos, especialmente frente al retroceso en la disponibilidad de datos públicos y la opacidad estatal en la gestión ambiental.

Otro eje central fue el impacto de la desinformación climática y las campañas de difamación que circulan en entornos digitales, debilitando la credibilidad de las comunidades y organizaciones que defienden el territorio. Frente a ello, se subrayó la importancia de proteger la integridad de la información como parte de la protección del medio ambiente.

Finalmente, las y los participantes coincidieron en que las tecnologías pueden ser herramientas de resiliencia y autonomía si se desarrollan con enfoque de derechos, participación comunitaria y sostenibilidad. La sesión reafirmó la necesidad de articular agendas de justicia climática y justicia digital, promoviendo un entorno físico y digital seguro para quienes defienden la vida, el medio ambiente y los territorios en América Latina.

Puntos principales:

La sesión, moderada por Jamila Venturini y Laura Mantilla-León (Derechos Digitales), se estructuró para visibilizar la encrucijada entre la crisis socioambiental, la labor de las personas defensoras y el impacto de las tecnologías digitales en América Latina. Las personas panelistas abordaron los desafíos en el territorio, las oportunidades tecnológicas y la respuesta institucional necesaria, estructurando los argumentos de la siguiente manera:

I. La Realidad del Riesgo, la Brecha Digital y la Resistencia Tecnológica (Oscar Daza Gutiérrez, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC)

Oscar Daza Gutiérrez expuso la compleja situación que viven las personas defensoras ambientales en la Amazonía colombiana, donde ejercer esta labor implica enfrentarse a diferentes actores armados, sea narcotraficantes, madereros ilegales, incluso a intereses de diferentes empresas extractivas. Subrayó que esta realidad se agrava por la estigmatización, ya que las y los defensores son señalados como “enemigos del desarrollo” o vinculados injustamente a grupos ilegales, lo que incrementa su vulnerabilidad.

Vulnerabilidad Institucional y Digital: Señaló la falta de una protección efectiva por parte del Estado y la débil implementación del Acuerdo de Escazú, lo cual restringe el acceso a la información, la justicia y la participación. Añadió que la lejanía geográfica y la escasa presencia estatal en la Amazonía acentúan la desigualdad tecnológica, generando un aislamiento digital debido a la baja conectividad y a los altos costos de los servicios satelitales.

Tecnología, Monitoreo y Riesgos Cibernéticos: Destacó el potencial de las herramientas digitales (como el monitoreo comunitario, los drones y los GPS) para fortalecer la vigilancia sobre la deforestación, la minería y la tala ilegal. Sin embargo, advirtió que el uso de estas tecnologías también conlleva riesgos, ya que puede facilitar la vigilancia y persecución hacia las y los defensores mediante el ciberacoso o delitos informáticos.

Exclusión en la Gobernanza Ambiental: Abordó la problemática de la modalidad virtual como forma exclusiva de participación en procesos, lo que limita la inclusión de los pueblos indígenas y defensores en los territorios amazónicos y concentra el conocimiento y las decisiones lejos de las comunidades.

Resistencia y Formación: Concluyó resaltando los procesos de resistencia de los pueblos indígenas, que combinan prácticas ancestrales con la incorporación responsable de nuevas tecnologías. Subrayó la necesidad de fortalecer la formación en derechos y herramientas digitales para ejercer la defensa territorial con autonomía y seguridad.

II. El Papel Transformador de las Redes Comunitarias (João Aguiar, Internet Society)

João Aguiar complementó la discusión enfocándose en la importancia de las redes comunitarias como una solución resiliente frente a la exclusión digital estructural. Argumentó que estas redes son esenciales para garantizar un acceso con sentido y que su valor reside

en ser manejadas por las comunidades y hechas de una manera que va a servir las reales necesidades de ellos, fortaleciendo tanto la defensa territorial como la sostenibilidad local.

Resiliencia y Autodefensa: Presentó el ejemplo de la red de mujeres Quebradoras de Coco Babaçu en Maranhão (Brasil), quienes usaron la conectividad para desarrollar una actividad económica sostenible y, al mismo tiempo, para defenderse de invasiones que pasaban en sus tierras. La red permitió establecer comunicación inmediata entre comunidades y solicitar ayuda sin desplazarse a la ciudad, reduciendo los riesgos que implicaban esos trayectos.

Autonomía y Sustentabilidad: Mencionó también la experiencia de una comunidad indígena en Panamá que, tras la creación de un parque nacional en su territorio, utilizó la conectividad para reinventar su economía mediante visitas culturales y contacto directo con turistas, fortaleciendo su autonomía.

Infraestructura Comunitaria: Aguiar advirtió sobre el riesgo de depender de tecnologías controladas por actores externos, como los satélites de baja órbita, cuyos proveedores pueden imponer costos elevados o incluso cortar conexión cuando quieren cortar la conexión. Subrayó que la infraestructura digital debe ser de la comunidad, asegurando así la soberanía tecnológica y la continuidad del acceso para proteger el medio ambiente y los territorios.

III. La Transparencia, el Apagón de Datos y el Mandato de Escazú (Maria Paula González Espinel, Ambiente y Sociedad)

Maria Paula González Espinel articuló el impacto de la falta de transparencia en la vulnerabilidad de las personas defensoras del ambiente, destacando cómo la carencia de información ambiental debilita la democracia ambiental y limita la capacidad de las comunidades para monitorear las actividades con impacto ecológico en sus territorios.

Consecuencias de la Opacidad: Argumentó que la ausencia de información ambiental oficial limita los escenarios de rendición de cuentas y aumenta la vulnerabilidad frente a las amenazas que sufren las personas que están en territorio. Esta falta de transparencia legitima las denuncias que se realizan y se vincula directamente con los altos niveles de violencia contra las y los defensores ambientales, como ocurre en Colombia.

Apagón de Datos: Subrayó la dificultad de la defensa territorial ante un apagón de datos, es decir, la ausencia de datos oficiales de deforestación, de permisos otorgados, de licencias ambientales que estén actualizados. Explicó que esta carencia de información no solo impide el monitoreo y la rendición de cuentas, sino que también limita la posibilidad de obtener pruebas que puedan ser utilizadas, por ejemplo, en litigios, denuncias o consultas públicas.

Soluciones y Acceso a la Información: Defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia activa y de crear datos abiertos y accesibles para cualquier persona. Señaló el rol esencial de la sociedad civil y de los medios de comunicación,

incluidos los alternativos, en la generación y difusión de información ambiental. En este contexto, resaltó el Acuerdo de Escazú como un instrumento vinculante y fundamental para la región, que obliga a los Estados a garantizar los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, además de reconocer explícitamente la labor de quienes defienden el ambiente y la necesidad de protegerlos en esta actividad.

IV. El Combate a la Desinformación Climática (Renata Negrelly, Secretaría de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil)

Renata Negrelly abordó la desinformación como una amenaza directa a la integridad informativa y a la democracia misma, destacando que los flujos de información imprecisa y el negacionismo climático obstaculizan las acciones urgentes necesarias frente al cambio climático.

Riesgo Amplificado por la Tecnología: Señaló que la desinformación y el negacionismo climático han sido clasificados por Naciones Unidas como la más grande vulnerabilidad para el mundo contemporáneo. Explicó que la estructura del entorno digital, basada en la economía de la atención, incentiva la circulación de contenidos que capturan el interés del público, no necesariamente los más precisos. Esto perjudica la integridad de la información climática y, en consecuencia, afecta la democracia misma, al impedir que los ciudadanos cuenten con datos confiables para tomar decisiones informadas.

Iniciativa Global y Acciones Coordinadas: Describió la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático, apoyada por Brasil junto a la UNESCO y más de diez países. Explicó que esta iniciativa promueve el fortalecimiento del conocimiento científico sobre la desinformación climática, el apoyo al periodismo investigativo ambiental y la recopilación de buenas prácticas de más de 35 países, además de impulsar la cooperación entre gobiernos, academia y sociedad civil.

Protección de Periodistas y Sociedad Civil: Destacó la creación en Brasil de una red con más de 130 organizaciones de la sociedad civil, académicas y no gubernamentales dedicadas a promover un ambiente de información sostenible. Con base en datos de la UNESCO, advirtió que América Latina es una de las regiones más violentas para periodistas que investigan crímenes ambientales, solo superada por zonas en guerra. Enfatizó que proteger a quienes investigan y defienden los derechos ambientales es esencial para garantizar la integridad informativa y la transparencia democrática.

V. Desafíos Estructurales y Críticas a la Gobernanza (Joara Marchezini, Instituto Nupef)

Joara Marchezini destacó la importancia de abordar la intersección entre tecnología y justicia climática como un eje estratégico para fortalecer la autonomía de las comunidades y su capacidad de proteger los territorios. Enfatizó que la infraestructura tecnológica, cuando es autónoma, resiliente y segura, puede convertirse en una herramienta esencial para la sostenibilidad ambiental, la defensa de derechos y la participación informada en procesos de toma de decisiones.

Déficit de Información y Limitaciones de Acceso: Señaló que en Brasil persiste una carencia estructural de información pública sobre grandes proyectos de infraestructura, como parques eólicos o hidroeléctricas. Los estudios de impacto ambiental suelen presentarse en formatos altamente técnicos y con plazos reducidos, lo que restringe la posibilidad de comprensión y participación efectiva por parte de las comunidades locales.

Desinformación y Transparencia: Marchezini subrayó que la desinformación ambiental no es un fenómeno fortuito, sino una consecuencia de la falta de transparencia y del acceso desigual a la información. Indicó que una comunidad bien informada tiene mayor capacidad de deliberar y de tomar decisiones que reflejen sus intereses y valores territoriales.

Tecnología y Protección Integral: Destacó que el acceso a Internet debe entenderse como un derecho que va más allá de la conectividad. Requiere condiciones que garanticen seguridad digital, protección de datos y respeto por los tiempos comunitarios. Propuso una visión de protección integral, que articule los ámbitos en línea y fuera de línea, evitando que el uso inadecuado de herramientas digitales exponga a las comunidades o debilite su seguridad.

Participación y Justicia Climática: Subrayó que los procesos de consulta y deliberación internacionales, como los vinculados a acuerdos ambientales y climáticos, continúan siendo altamente técnicos y poco accesibles. Insistió en la necesidad de adaptar estos mecanismos para garantizar una participación inclusiva y equitativa, especialmente de quienes enfrentan mayores barreras tecnológicas y lingüísticas.

Reconocimiento Regional y Perspectiva de Futuro: Finalmente, valoró la incorporación de la brecha digital como uno de los desafíos prioritarios en el Plan de Acción Regional de Defensoras y Defensores del Acuerdo de Escazú, al considerar que dicho reconocimiento permite avanzar hacia una justicia climática más abierta, colaborativa y centrada en las comunidades.

VI. Uso Coordinado del SIDH y la Necesidad de la Debida Diligencia Tecnológica (Javier Palummo, Redesca/CIDH)

Javier Palummo destacó la relevancia de articular de manera coordinada los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para fortalecer la protección ambiental y la defensa de las personas y comunidades que resguardan el territorio y los recursos naturales.

Complementariedad normativa: Señaló que el Acuerdo de Escazú ha sido reconocido por la CIDH y la Corte IDH como parte del Corpus Iuris Interamericano, y subrayó la necesidad de aplicarlo conjuntamente con otros marcos jurídicos como el Protocolo de San Salvador (que reconoce el derecho al ambiente sano desde 1988) y con las sentencias de la Corte Interamericana, especialmente la emitida en el caso *Claude Reyes vs. Chile* (2006), que consolidó el acceso a la información ambiental como un derecho exigible.

Mecanismos de protección específicos: Explicó que, aunque Escazú constituye un avance relevante, carece de mecanismos de tutela inmediata. En ese sentido, resaltó que el SIDH dispone de herramientas como las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permiten proteger la vida y la integridad de personas defensoras del ambiente.

Intersección entre tecnología y derechos humanos: Analizó la relación entre tecnología y derecho al ambiente sano, destacando su potencial para fortalecer la visibilidad y la coordinación de las personas defensoras, así como para documentar violaciones y conectar actores en distintos territorios. No obstante, advirtió que las tecnologías también pueden habilitar nuevas formas de vigilancia, control y ataque, en particular contra liderazgos indígenas y mujeres defensoras, lo que exige fortalecer los estándares de protección en el espacio digital.

Responsabilidad empresarial y no neutralidad tecnológica: Subrayó que muchas tecnologías digitales actuales fueron concebidas bajo racionalidades militares o de control, y que su diseño puede generar impactos adversos en materia de derechos humanos. Por ello, instó a abandonar la idea de neutralidad tecnológica y promover que las empresas desarrolladoras cumplan con su debida diligencia en la evaluación de riesgos y en la prevención de violaciones a los derechos humanos.

Preguntas del Público:

Debido a restricciones de tiempo, no se abrió una ronda de preguntas al público. Las siguientes preguntas guiaron el debate planteado por la moderación a lo largo de la sesión:

Sobre el Riesgo Territorial, la Brecha Digital y la Exclusión en la Gobernanza (Óscar Daza Gutiérrez, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC):

La moderación indagó a Óscar Daza Gutiérrez sobre las principales barreras que enfrentan hoy las personas defensoras medioambientales en su labor cotidiana y cómo estas dificultades se cruzan con las nuevas tecnologías de internet, con el fin de establecer un marco de entendimiento de la conversación. Asimismo, se le solicitó comentar sobre los desafíos de participación en los espacios de incidencia que dependen únicamente de una modalidad virtual de integración, mencionando específicamente los acuerdos de Escazú o la COP 30 y qué se podría hacer para disminuir las desigualdades de acceso en ese contexto.

Sobre el Rol de las Redes Comunitarias y la Autonomía Digital (João Aguiar, Internet Society):

En el contexto de la exclusión digital estructural que afecta a muchas personas defensoras del medio ambiente (caracterizada por la falta de infraestructura y el alto costo de conectividad), a João Aguiar se le solicitó analizar la importancia del reconocimiento, protección y promoción de las redes comunitarias. Además, el debate buscó conocer

ejemplos o experiencias concretas en América Latina donde estas redes han servido como una herramienta para resistir y proteger a personas defensoras medioambientales.

Sobre la Crisis de Transparencia y el Marco de Escazú (María Paula González Espinel, Ambiente y Sociedad):

El enfoque en la transparencia institucional llevó a cuestionar a María Paula González Espinel sobre qué consecuencias tiene la falta de acceso a la información para las personas defensoras del medio ambiente y para la posibilidad de exigir rendición de cuentas en la región. En el contexto del preocupante "apagón de datos" (desaparición de información pública), se indagó sobre qué estrategias o iniciativas podrían fortalecerse para el acceso público a los datos ambientales y qué papel pueden tener la sociedad civil, los medios y los marcos como el acuerdo de Escazú para la transparencia y el control ciudadano.

Sobre la Integridad Informativa y el Combate a la Desinformación (Renata Negrelly, Secretaría de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil):

En continuidad con la observación sobre la crisis informativa, se dirigió la atención de Renata Negrelly hacia cómo circula la desinformación ambiental en la región, en particular aquella que busca justamente desacreditar o silenciar a las defensoras ambientales, y se planteó por qué proteger la integridad de la información sobre su trabajo es también una forma de proteger el propio medio ambiente. Finalmente, se preguntó sobre qué acciones concretas pueden desarrollarse para enfrentar este problema en la región, incluso con miras a la COP 30.

Sobre el Uso de Tecnologías y el Fortalecimiento Colectivo (Joara Marchezini, Instituto Nupef):

A Joara Marchezini se le pidió, basándose en la experiencia del Instituto Nupef en la defensa territorial contra distintas formas de extractivismo, comentar sobre cómo se relaciona la defensa de esos territorios con el uso de las tecnologías. Además, se buscó identificar qué aprendizajes o caminos deben fortalecerse colectivamente para proteger a quienes defienden el medio ambiente y garantizar justicia climática en América Latina, evaluando en particular las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Escazú en esa dirección.

Sobre la Protección Integral del SIDH y las Medidas Estatales (Javier Palummo, Redesca/CIDH):

Finalmente, a Javier Palummo se le solicitó detallar cómo ha enfrentado la Relatoría la situación regional en materia de defensa del medio ambiente y el territorio, y de qué manera se puede apoyar la labor de la relatoría por parte de las organizaciones presentes. También se le preguntó sobre qué medidas concretas tienen que tomar los Estados para garantizar un entorno físico y digital seguro y propicio para las personas y grupos defensores del medio ambiente, considerando los desafíos que enfrentan en la región.

Conteúdo da Relatoria (Português)

Mensagens centrais:

A sessão, coorganizada por Derechos Digitales e pelo Instituto Nupef, teve como objetivo principal dar visibilidade ao papel das pessoas defensoras do meio ambiente no contexto da crise socioambiental e energética, abordando as barreiras que enfrentam, o potencial das tecnologias para fortalecer seu trabalho e os desafios para que isso se concretize.

As intervenções mostraram que as pessoas defensoras do meio ambiente enfrentam uma combinação de desigualdades estruturais e ameaças digitais que limitam sua capacidade de participação e sua segurança. A exclusão digital, a falta de infraestrutura de conectividade, os altos custos de acesso e as barreiras linguísticas e tecnológicas foram apontados como fatores que aprofundam a exclusão dessas pessoas dos espaços de decisão.

Destacou-se também que a transparência e o acesso à informação ambiental são condições essenciais para a prestação de contas e a defesa de direitos, especialmente diante do retrocesso na disponibilidade de dados públicos e da opacidade estatal na gestão ambiental.

Outro ponto central foi o impacto da desinformação climática e das campanhas de difamação que circulam nos ambientes digitais, enfraquecendo a credibilidade das comunidades e organizações que defendem os territórios. Diante disso, ressaltou-se a importância de proteger a integridade da informação como parte da proteção ambiental.

Por fim, os participantes concordaram que as tecnologias podem ser ferramentas de resiliência e autonomia se forem desenvolvidas com enfoque em direitos, participação comunitária e sustentabilidade. A sessão reafirmou a necessidade de articular as agendas de justiça climática e justiça digital, promovendo um ambiente físico e digital seguro para quem defende a vida, o meio ambiente e os territórios na América Latina.

Principais pontos

A sessão, moderada por Jamila Venturini e Laura Mantilla-León (Derechos Digitales), foi estruturada para tornar visível a encruzilhada entre a crise socioambiental, o trabalho das pessoas defensoras e o impacto das tecnologias digitais na América Latina. As pessoas palestrantes abordaram os desafios nos territórios, as oportunidades tecnológicas e a resposta institucional necessária, estruturando os argumentos da seguinte maneira:

I. A Realidade do Risco, a Brecha Digital e a Resistência Tecnológica (Oscar Daza Gutiérrez, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC)

Oscar Daza Gutiérrez expôs a complexa situação vivida pelas pessoas defensoras ambientais na Amazônia colombiana, onde exercer essa função implica enfrentar diferentes atores armados, como narcotraficantes, madeireiros ilegais e interesses de empresas extrativas. Ressaltou que essa realidade se agrava pela estigmatização, já que as defensoras e defensores são rotulados como “inimigos do desenvolvimento” ou injustamente vinculados a grupos ilegais, o que aumenta sua vulnerabilidade.

Vulnerabilidade Institucional e Digital: Destacou a falta de proteção efetiva por parte do Estado e a fraca implementação do Acordo de Escazú, o que restringe o acesso à informação, à justiça e à participação. Acrescentou que a distância geográfica e a escassa presença estatal na Amazônia acentuam a desigualdade tecnológica, gerando isolamento digital devido à baixa conectividade e aos altos custos dos serviços via satélite.

Tecnologia, Monitoramento e Riscos Cibernéticos: Destacou o potencial das ferramentas digitais (como monitoramento comunitário, drones e GPS) para fortalecer a vigilância sobre a desflorestação, a mineração e a extração ilegal de madeira. No entanto, advertiu que o uso dessas tecnologias também traz riscos, pois pode facilitar a vigilância e a perseguição contra defensoras e defensores por meio de assédio cibernético ou crimes informáticos.

Exclusão na Governança Ambiental: Abordou o problema da modalidade virtual como forma exclusiva de participação em processos, o que limita a inclusão dos povos indígenas e das pessoas defensoras nos territórios amazônicos e concentra o conhecimento e as decisões longe das comunidades.

Resistência e Formação: Concluiu destacando os processos de resistência dos povos indígenas, que combinam práticas ancestrais com a incorporação responsável de novas tecnologias. Ressaltou a necessidade de fortalecer a formação em direitos e ferramentas digitais para exercer a defesa territorial com autonomia e segurança.

II. O Papel Transformador das Redes Comunitárias (João Aguiar, Internet Society)

João Aguiar complementou a discussão enfatizando a importância das redes comunitárias como solução resiliente diante da exclusão digital estrutural. Argumentou que essas redes são essenciais para garantir um acesso significativo e que seu valor reside no fato de serem geridas pelas próprias comunidades e construídas de forma a atender suas reais necessidades, fortalecendo tanto a defesa territorial quanto a sustentabilidade local.

Resiliência e Autodefesa: Apresentou o exemplo da rede de mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu no Maranhão (Brasil), que utilizaram a conectividade para desenvolver uma atividade econômica sustentável e, ao mesmo tempo, se proteger de invasões em suas terras. A rede permitiu estabelecer comunicação imediata entre comunidades e solicitar ajuda sem precisar se deslocar até a cidade, reduzindo os riscos dessas viagens.

Autonomia e Sustentabilidade: Mencionou também a experiência de uma comunidade indígena no Panamá que, após a criação de um parque nacional em seu território, utilizou a

conectividade para reinventar sua economia por meio de visitas culturais e contato direto com turistas, fortalecendo sua autonomia.

Infraestrutura Comunitária: Aguiar advertiu sobre o risco de depender de tecnologias controladas por atores externos, como satélites de baixa órbita, cujos provedores podem impor custos elevados ou até cortar a conexão a qualquer momento. Ressaltou que a infraestrutura digital deve ser comunitária, assegurando assim a soberania tecnológica e a continuidade do acesso para proteger o meio ambiente e os territórios.

III. Transparência, Apagão de Dados e o Mandato de Escazú (Maria Paula González Espinel, Ambiente y Sociedad)

Maria Paula González Espinel articulou o impacto da falta de transparência na vulnerabilidade das pessoas defensoras do meio ambiente, destacando como a ausência de informação ambiental enfraquece a democracia ambiental e limita a capacidade das comunidades de monitorar atividades com impacto ecológico em seus territórios.

Consequências da Opacidade: Argumentou que a ausência de informação ambiental oficial limita os mecanismos de prestação de contas e aumenta a vulnerabilidade diante das ameaças enfrentadas por quem atua nos territórios. Essa falta de transparência legitima as denúncias realizadas e está diretamente ligada aos altos níveis de violência contra defensoras e defensores ambientais, como ocorre na Colômbia.

Apagão de Dados: Destacou a dificuldade da defesa territorial diante de um apagão de dados, isto é, a ausência de dados oficiais sobre desmatamento, concessões e licenças ambientais atualizadas. Explicou que essa carência de informações não apenas impede o monitoramento e a prestação de contas, mas também limita a obtenção de provas que possam ser usadas em litígios, denúncias ou consultas públicas.

Soluções e Acesso à Informação: Defendeu o fortalecimento de mecanismos de transparência ativa e a criação de dados abertos e acessíveis a todas as pessoas. Destacou o papel essencial da sociedade civil e dos meios de comunicação, inclusive os alternativos, na geração e difusão de informação ambiental. Nesse contexto, ressaltou o Acordo de Escazú como instrumento vinculante e fundamental para a região, que obriga os Estados a garantir os direitos de acesso à informação, à participação e à justiça ambiental, além de reconhecer explicitamente o trabalho das pessoas defensoras do meio ambiente e a necessidade de protegê-las nessa atividade.

IV. O Combate à Desinformação Climática (Renata Negrelly, Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil)

Renata Negrelly abordou a desinformação como uma ameaça direta à integridade informativa e à própria democracia, destacando que os fluxos de informações imprecisas e o negacionismo climático dificultam as ações urgentes necessárias diante das mudanças climáticas.

Risco Ampliado pela Tecnologia: Ressaltou que a desinformação e o negacionismo climático foram classificados pela ONU como a maior vulnerabilidade do mundo

contemporâneo. Explicou que a estrutura do ambiente digital, baseada na economia da atenção, incentiva a circulação de conteúdos que atraem o interesse do público, não necessariamente os mais precisos. Isso prejudica a integridade da informação climática e, consequentemente, afeta a própria democracia, ao impedir que cidadãos tenham dados confiáveis para tomar decisões informadas.

Iniciativa Global e Ações Coordenadas: Descreveu a Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudança Climática, apoiada pelo Brasil em conjunto com a UNESCO e mais de dez países. Explicou que essa iniciativa promove o fortalecimento do conhecimento científico sobre a desinformação climática, o apoio ao jornalismo investigativo ambiental e a coleta de boas práticas de mais de 35 países, além de impulsionar a cooperação entre governos, academia e sociedade civil.

Proteção de Jornalistas e Sociedade Civil: Destacou a criação no Brasil de uma rede com mais de 130 organizações da sociedade civil, acadêmicas e não governamentais dedicadas a promover um ambiente informativo sustentável. Com base em dados da UNESCO, advertiu que a América Latina é uma das regiões mais violentas para jornalistas que investigam crimes ambientais, ficando atrás apenas de zonas de guerra. Enfatizou que proteger quem investiga e defende os direitos ambientais é essencial para garantir a integridade informativa e a transparência democrática.

V. Desafios Estruturais e Críticas à Governança (Joara Marchezini, Instituto Nupef)

Joara Marchezini destacou a importância de abordar a interseção entre tecnologia e justiça climática como eixo estratégico para fortalecer a autonomia das comunidades e sua capacidade de proteger os territórios. Ressaltou que a infraestrutura tecnológica, quando autônoma, resiliente e segura, pode se tornar uma ferramenta essencial para a sustentabilidade ambiental, a defesa de direitos e a participação informada em processos de tomada de decisão.

Déficit de Informação e Limitações de Acesso: Observou que no Brasil persiste uma carência estrutural de informação pública sobre grandes projetos de infraestrutura, como parques eólicos ou hidrelétricas. Os estudos de impacto ambiental geralmente são apresentados em formatos excessivamente técnicos e com prazos curtos, o que restringe a compreensão e a participação efetiva das comunidades locais.

Desinformação e Transparência: Marchezini enfatizou que a desinformação ambiental não é um fenômeno aleatório, mas consequência da falta de transparência e do acesso desigual à informação. Indicou que uma comunidade bem informada tem maior capacidade de deliberar e tomar decisões que reflitam seus interesses e valores territoriais.

Tecnologia e Proteção Integral: Destacou que o acesso à Internet deve ser entendido como um direito que vai além da conectividade. Requer condições que garantam segurança digital, proteção de dados e respeito aos tempos comunitários. Propôs uma visão de proteção integral que articule os âmbitos online e offline, evitando que o uso inadequado de ferramentas digitais exponha as comunidades ou enfraqueça sua segurança.

Participação e Justiça Climática: Enfatizou que os processos de consulta e deliberação internacionais, como os relacionados a acordos ambientais e climáticos, continuam altamente técnicos e pouco acessíveis. Reforçou a necessidade de adaptar esses mecanismos para garantir participação inclusiva e equitativa, especialmente para quem enfrenta maiores barreiras tecnológicas e linguísticas.

Reconhecimento Regional e Perspectiva de Futuro: Finalmente, valorizou a inclusão da brecha digital como um dos desafios prioritários no Plano de Ação Regional de Defensoras e Defensores do Acordo de Escazú, considerando que esse reconhecimento permite avançar em direção a uma justiça climática mais aberta, colaborativa e centrada nas comunidades.

VI. Uso Coordenado do SIDH e a Necessidade da Devida Diligência Tecnológica (Javier Palummo, Redesca/CIDH)

Javier Palummo destacou a importância de articular de forma coordenada os instrumentos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) para fortalecer a proteção ambiental e a defesa das pessoas e comunidades que preservam o território e os recursos naturais.

Complementariedade Normativa: Ressaltou que o Acordo de Escazú foi reconhecido pela CIDH e pela Corte IDH como parte do Corpus Iuris Interamericano e sublinhou a necessidade de aplicá-lo em conjunto com outros marcos jurídicos, como o Protocolo de San Salvador (que reconhece o direito a um meio ambiente saudável desde 1988) e as sentenças da Corte Interamericana, especialmente a emitida no caso *Claude Reyes vs. Chile* (2006), que consolidou o acesso à informação ambiental como um direito exigível.

Mecanismos de Proteção Específicos: Explicou que, embora Escazú represente um avanço relevante, carece de mecanismos de tutela imediata. Nesse sentido, destacou que o SIDH dispõe de ferramentas como as medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que permitem proteger a vida e a integridade das pessoas defensoras do meio ambiente.

Interseção entre Tecnologia e Direitos Humanos: Analisou a relação entre tecnologia e o direito a um meio ambiente saudável, destacando seu potencial para fortalecer a visibilidade e a coordenação das pessoas defensoras, bem como documentar violações e conectar atores em diferentes territórios. No entanto, advertiu que as tecnologias também podem habilitar novas formas de vigilância, controle e ataque, em especial contra lideranças indígenas e mulheres defensoras, o que exige fortalecer os padrões de proteção no espaço digital.

Responsabilidade Empresarial e Não Neutralidade Tecnológica: Ressaltou que muitas tecnologias digitais atuais foram concebidas sob racionalidades militares ou de controle, e que seu design pode gerar impactos adversos em matéria de direitos humanos. Por isso, defendeu o abandono da ideia de neutralidade tecnológica e a promoção da devida diligência por parte das empresas desenvolvedoras, a fim de avaliar riscos e prevenir violações de direitos humanos.

Perguntas do público

Devido a restrições de tempo, não foi aberta uma rodada de perguntas ao público. As seguintes perguntas orientaram o debate proposto pela moderação ao longo da sessão:

Sobre o risco territorial, a exclusão digital e a exclusão na governança (Óscar Daza Gutiérrez, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC):

A moderação perguntou a Óscar Daza Gutiérrez sobre as principais barreiras que as pessoas defensoras do meio ambiente enfrentam hoje em seu trabalho cotidiano e como essas dificuldades se relacionam com as novas tecnologias da internet, a fim de estabelecer um quadro de compreensão da conversa.

Também foi solicitado que comentasse sobre os desafios de participação em espaços de incidência que dependem exclusivamente de modalidades virtuais de integração, mencionando especificamente o Acordo de Escazú e a COP 30, e o que poderia ser feito para reduzir as desigualdades de acesso nesse contexto.

Sobre o papel das redes comunitárias e a autonomia digital (João Aguiar, Internet Society):

No contexto da exclusão digital estrutural que afeta muitas pessoas defensoras do meio ambiente, caracterizada pela falta de infraestrutura e pelo alto custo da conectividade, João Aguiar foi convidado a analisar a importância do reconhecimento, da proteção e da promoção das redes comunitárias.

Além disso, o debate buscou conhecer exemplos ou experiências concretas na América Latina em que essas redes tenham servido como ferramenta para resistir e proteger pessoas defensoras do meio ambiente.

Sobre a crise de transparência e o marco de Escazú (María Paula González Espinel, Ambiente y Sociedad):

O foco na transparência institucional levou a moderação a questionar María Paula González Espinel sobre quais consequências a falta de acesso à informação tem para as pessoas defensoras do meio ambiente e para a possibilidade de exigir prestação de contas na região.

No contexto do preocupante "apagão de dados", entendido como o desaparecimento de informações públicas, foi perguntado que estratégias ou iniciativas poderiam ser fortalecidas para garantir o acesso público a dados ambientais e qual o papel que a sociedade civil, a mídia e marcos como o Acordo de Escazú podem desempenhar na promoção da transparência e do controle cidadão.

Sobre a integridade informacional e o combate à desinformação (Renata Negrelly, Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil):

Dando continuidade à discussão sobre a crise informacional, a moderação direcionou a atenção de Renata Negrelly à forma como a desinformação ambiental circula na região, especialmente aquela que busca desacreditar ou silenciar as defensoras ambientais, e

perguntou por que proteger a integridade da informação sobre o trabalho delas também é uma forma de proteger o próprio meio ambiente.

Por fim, questionou quais ações concretas podem ser desenvolvidas para enfrentar esse problema na região, inclusive em vista da COP 30.

Sobre o uso de tecnologias e o fortalecimento coletivo (Joara Marchezini, Instituto Nupef):

Com base na experiência do Instituto Nupef na defesa territorial contra diferentes formas de extrativismo, Joara Marchezini foi convidada a comentar como se relaciona a defesa desses territórios com o uso das tecnologias.

O debate buscou identificar quais aprendizados e caminhos devem ser fortalecidos coletivamente para proteger quem defende o meio ambiente e garantir justiça climática na América Latina, avaliando em particular as oportunidades oferecidas pelo Acordo de Escazú nesse sentido.

Sobre a proteção integral no SIDH e as medidas estatais (Javier Palummo, REDESCA/CIDH):

Por fim, Javier Palummo foi convidado a detalhar como a Relatoria tem enfrentado a situação regional em matéria de defesa do meio ambiente e dos territórios e de que maneira as organizações presentes podem apoiar o trabalho da relatoria.

Também foi perguntado quais medidas concretas os Estados precisam adotar para garantir um ambiente físico e digital seguro e propício para as pessoas e grupos que defendem o meio ambiente, considerando os desafios enfrentados na região.